

Política y poder en la **AMAZONIA**

*Estrategias de los pueblos indígenas en los nuevos
escenarios de los países andinos*

François Correa
Philippe Erikson
Alexandre Surrallés
EDITORES



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

2016

COLECCIÓN  ACADEMIA

Catalogación en la publicación Biblioteca Nacional de Colombia

Política y poder en la Amazonia / eds. Francois Correa Rubio, Philippe Erikson, Alexandre Surra-llés -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología; ... , 2016.

264 páginas – (Colección Academia)

ISBN : 978-958-000-000-0

1. La paradoja como gobernanza 2. Relaciones contemporáneas Estado-organizaciones indígenas amazónicas en Ecuador: entre alianzas, oposición y resistencia. 3. El proceso organizativo indígena del Trapecio Amazónico: entre la autonomía y la cooptación del Estado. 4. Política y poder entre los Tukano y Arawak del alto río Negro y Orinoco. 5. Clientelismo, élites y pragmatismo político indígena en la Amazonia contemporánea: Revisando algunas categorías de análisis político. 6. La carrera política de un líder chácobo de la Amazonia boliviana o de cómo Rabi «Yobéca» se volvió Alberto «Toro» Ortiz. 7. Políticas de la representación y participación entre los nùkak (Amazonia colombiana). Transformaciones y continuidades. 8. Un homicidio sin venganza: la violencia intraétnica en comunidades awajún (aguaruna) contemporáneas de la Amazonia peruana. 9. Los awajún contra Herzog. Uso del conflicto en la construcción del liderazgo indígena. 10. Patrimonio histórico y memoria entre los uitoto del Amazonas. Transformación de las ruinas de la Casa Arana en La Chorrera (río Igara Paraná, Colombia)

CDD : 000000000

Política y poder en la Amazonia

Estrategias de los pueblos indígenas en los nuevos escenarios de los países andinos

© Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas.
Primera edición 2016

ISBN: 00000000000000

Comité Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas

Luz Amparo Fajardo Uribe · Decana
Nohra León Rodríguez · Vicedecana Académica
Myriam Constanza Moya Pardo · Vicedecana de Investigación y Extensión
Rodolfo Suárez Ortega · Director Departamento de Lenguas Extranjeras
Jorge Aurelio Díaz · Editor Revista *Ideas y Valores*
Carlo Tognato · Director Centro de Estudios Sociales

Preparación editorial

Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas

Camilo Baquero Castellanos · Director
Francisco Díaz-Granados M. · Corrección de estilo
Juan Carlos Villamil · Coordinación gráfica
Yully Paola Cortés Hernández · Desarrollo gráfico y diagramación
editorial_fch@unal.edu.co
www.humanas.unal.edu.co
Bogotá D. C.

Imágen de cubierta: Bastón sonajero de danza. Cortesía archivo ICANH,

Colección archivo de objetos etnográficos. Código: E-90-XI-53.

Imágenes en portadillas: reproducimos con autorización del ICANH, las fotografías con los códigos

48-I-51374, E-62-V-309, 5046-E-46, E-83-VII-611, 48-I-51371, 321, 48-I-51395, E-90-II-33, 46-II-50287, E-83-VII-613, E-95-IX-146, 46-I-51405, E-83-IV-417, E-83-VII-604, E-72-I-368.

Impreso en Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Este libro contó con el respaldo institucional de:



Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)



Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)



Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Ecuador



Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)



Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)



Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie
Comparative, UMR 7186



Universidad Nacional de Colombia
Vicerrectoría de Investigación
Sedes Bogotá y Amazonia

Contenido



Presentación

François Correa, Philippe Erikson y Alexandre Surallés

12

La paradoja como gobernanza

Jean-Pierre Chaumeil

24

Relaciones contemporáneas Estado-organizaciones indígenas amazónicas en Ecuador: entre alianzas, oposición y resistencia

Ivette Vallejo, Corinne Duhalde y Natalia Valdivieso

36

El proceso organizativo indígena del Trapecio Amazónico: entre la autonomía y la cooptación del Estado

Juan José Vieco

68

Política y poder entre los Tukano y Arawak del alto río Negro y Orinoco

François Correa

94

Clientelismo, élites y pragmatismo político indígena en la Amazonia contemporánea: Revisando algunas categorías de análisis político

Óscar Espinosa

128

La carrera política de un líder chácobo de la Amazonia boliviana
o de cómo Rabi «Yobëca» se volvió Alberto «Toro» Ortiz

Philippe Erikson

146

Políticas de la representación y participación entre los nükak
(Amazonia colombiana). Transformaciones y continuidades

Dany Mahecha y Carlos Eduardo Franky

162

Un homicidio sin venganza: la violencia intraétnica en comunidades
awajún (aguaruna) contemporáneas de la Amazonia peruana

Erik Pozo

182

Los awajún contra Herzog.

Uso del conflicto en la construcción del liderazgo indígena

Silvia Romio

208

Patrimonio histórico y memoria entre los uitoto del
Amazonas. Transformación de las ruinas de la Casa
Arana en La Chorrera (río Igara Paraná, Colombia)

Laura María Martínez R. y Roberto Pineda C.

234

Las y los autores

246

Índice de materias

255

Organizaciones y siglas

261

Relaciones contemporáneas Estado-organizaciones indígenas amazónicas en Ecuador: entre alianzas, oposición y resistencia*

IVETTE VALLEJO; CORINNE DUHALDE, NATALIA VALDIVIESO
Profesora investigadora; investigadoras de FLACSO (Ecuador)



* Los datos del presente artículo además de revisión documental, fueron recabados durante investigaciones de campo realizadas entre 2014 y 2015, en el marco del Proyecto «Ecologías políticas de la diferencia en lugares del circuito petrolero en costa y Amazonia del Ecuador», implementado desde FLACSO (Ecuador).



Escenario y coyuntura política

La etnopolítica amazónica en la relación entre Estado y pueblos indígenas dentro del marco de un gobierno definido como post-neoliberal (Socialismo del Siglo XXI), en el poder desde 2007, ha fluctuado entre alianzas y resistencias. Esto, frente a las dinámicas del desarrollo, y de revitalizada incorporación de territorios y recursos naturales existentes en la Amazonia a los circuitos de los *commodities* a nivel global. El presente artículo analiza estas relaciones, situándolas en un contexto mayor en el que confluyen distintos movimientos sociales y sectores políticos en el Ecuador.

El 13 de agosto de 2015 las centrales sindicales lideraron un Paro Nacional con varias concentraciones en distintas ciudades del país, al que se plegaron movimientos ecologistas, de mujeres, jubilados del Instituto de Seguridad Social (IESS), académicos y ciudadanía en general. En la capital, Quito, confluyeron participantes de la Marcha por la Dignidad y la Vida convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que inició su recorrido el 2 de agosto desde la parroquia de Tundayme en la provincia de Zamora Chinchipe, Amazonia suroriente, en la cordillera del Cóndor, donde el gobierno apuntala la minería a gran escala².

2 En Morona Santiago y Zamora Chinchipe el gobierno apuntala proyectos de minería de cobre a gran escala y a cielo abierto. El 21 de diciembre de 2015 se inauguró formalmente el Proyecto Mirador, uno de los principales yacimientos de cobre, que empezará actividades a partir del 2018. Está siendo operado por la Empresa ECSA Ecuacorriente –anteriormente de capital canadiense, actualmente de capital chino con las compañías inversionistas: Yang Jun (Tongling Non Ferrous Metals Group) y Sun Gongxin (China Railway Construction Corporation–. La inauguración del proyecto estuvo marcada por una alta conflictividad, vulneración de derechos de población campesina y shuar,



Si bien el Paro Nacional se concentró en cuestionar enmiendas constitucionales en debate en la Asamblea Legislativa, con una mayoría de legisladores del movimiento de gobierno (Alianza País), confluyeron varios malestares ciudadanos acumulados durante los años de gobierno del presidente Rafael Correa. Meses antes, desde junio de 2015, en distintos lugares del país (Guayaquil, Cuenca, Loja y ciudades amazónicas como Coca y Puyo) y principalmente en la capital, Quito, se comenzaron a congregarse ciudadanos contrarios a propuestas de leyes planteadas desde el Ejecutivo y canalizadas hacia la Asamblea Legislativa. Entre ellas la ley del impuesto a la plusvalía y la ley de herencias, además de la enmienda constitucional relativa a la reelección indefinida para cargos de elección popular que, se pensaba, abriría paso a perennizar en el poder al presidente. Ante ello, varios movimientos y partidos políticos postularon la necesidad de una consulta popular para que la población se pronuncie, lo que no fue acogido ni por la Corte Constitucional ni por el Consejo Nacional Electoral³.

Las movilizaciones que llegaron a su culmen con el Paro Nacional amalgamaron distintas agendas políticas bajo el común denominador de no compartir el proyecto político y económico gubernamental. La agenda de los sectores sindicales se concentró en la restitución del 40% del aporte estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y, por parte del movimiento feminista, en cuestionar la actitud patriarcal en el ejercicio de gobierno y la merma de conquistas al respecto de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde el ecologismo, el desencanto se manifestó a partir del 2013 con la finalización de la Iniciativa Yasuní Ishpingo, Tambococha y Tipuni (ITT) con la que se aspiraba a dejar bajo el subsuelo reservas de crudo en los bloques 31 y 43 ITT del Parque Nacional y Reserva de Biósfera Yasuní, considerado emblemático por su biodiversidad y por ser territorio de pueblos indígenas aislados (tageri y taromenane).

El movimiento ecologista y organizaciones indígenas filiales a la Conaie confluyeron en cuestionar el incumplimiento por parte del gobierno a los Derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución (2008). Esto en zonas pretendidas para extracción minera a gran escala en Quimsacocha y río Blanco (Azuay), cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe) e Intag (Imbabura). Enfatizaron también en el retroceso en el respeto del marco internacional

al haberse producido a la par una serie de desalojos con operativos policiales, lo que se suma a los ya acaecidos desde septiembre de 2015.

3 Conforme a los mecanismos establecidos, la Corte Constitucional debería revisar la constitucionalidad de las propuestas de convocatoria a consulta popular y con su aprobación se procedería a que el Consejo Nacional Electoral la viabilice.

de derechos de los pueblos indígenas en lo relacionado con la consulta libre, previa e informada ante actividades exploratorias y de explotación de recursos naturales no renovables (petróleo y minería) en territorios indígenas⁴.

El movimiento indígena representado por la Conaie, cuestionó el progresivo desmantelamiento de las instituciones conseguidas en décadas previas dentro de la estructura del Estado, tales como la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib), la Dirección Nacional de Salud Intercultural, el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Fodepi) y, por último, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Condenpe)⁵. A esto se ha sumado el cierre de las escuelas comunitarias de Educación Intercultural Bilingüe en varias zonas rurales del país, reemplazadas por Centros Educativos y Unidades Educativas del Milenio articuladas a Distritos Educativos que aglutinan estudiantes de establecimientos antes dispersos. Si bien desde la perspectiva gubernamental el cierre obedece al interés de dotar los establecimientos con infraestructura adecuada y tecnologías de información que logren la inclusión de la población indígena con educación con estándares de calidad, Conaie y sus organizaciones filiales consideran que la política educativa no se adecúa al contexto rural, a las distancias de las comunidades a los nuevos centros educativos, y que se ha mermado la autonomía indígena en la gestión y administración de la educación intercultural bilingüe, a la vez que se han desplazado de los programas curriculares contenidos y epistemologías indígenas. Otro aspecto que se cuestiona es la restricción de jóvenes de comunidades indígenas de sectores rurales al libre acceso a universidades.

4 Una experiencia no satisfactoria de consulta previa fue conducida en el marco de la XI Ronda Petrolera lanzada en noviembre de 2012. Se implementó sin adecuarse a la normativa internacional y a la Constitución, lo que generó alta conflictividad y fragmentación (Vallejo, 2014). A partir de la expedición del Decreto Ejecutivo 1247 se efectuaron consultas para la licitación de 21 bloques, en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Napo con intervención de alrededor de 3,6 millones de hectáreas de la Amazonia. Algunos de estos bloques se traslapan con el 100% del territorio de las nacionalidades achuar, andwa, shiwiar y sapaara; 70% del territorio shuar, 97% del territorio kichwa y 16% del territorio waorani (Mazabanda, 2013).

5 El cierre del Codenpe obedece a la política de eliminación de los consejos instituidos en gobiernos previos dentro de políticas multiculturales vinculadas al reconocimiento de la diferencia, tales como el Consejo de Desarrollo de los Afroecuatorianos (Codae) y el Consejo Nacional de la Mujer (Conamu). Su cierre fue justificado con evitar el corporativismo de organizaciones y con la propuesta de crear Consejos de la Igualdad, hasta la fecha no implementados. Actualmente la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, con su Subsecretaría de los Pueblos e Interculturalidad los substituye ejerciendo funciones de control social.



Estos al no poder solventar exámenes de ingreso de aplicación general en el país, quedan relegados de la educación superior.

Desde el 2010 se ha producido un alejamiento del movimiento indígena representado por la Conaie, con sus filiales regionales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades de la Costa Ecuatoriana (Conaice) y Ecuador Runacunapac Riccharimui—Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), si bien otras organizaciones indígenas de carácter nacional, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), han mantenido su respaldo al gobierno nacional. Desde el régimen, se ha asumido una actitud persecutoria, hasta el punto de intentar en el 2015 desalojar a la Conaie de su sede, ocupada desde 1992 en Quito, en un edificio cedido en comodato como resarcimiento a la histórica exclusión de los pueblos indígenas.

Desde el gobierno, como respuesta a las movilizaciones, marcha indígena y Paro Nacional se organizaron Festivales de la Juventud y la Alegría para aglutinar sectores de apoyo al régimen, a la par que, se alistó una fuerte represión, apresamiento y judicialización de la resistencia. En la sierra sur, en Loja el ejército ingresó a viviendas de familias indígenas del pueblo Saraguro y se militarizaron áreas enteras del país aprovechando la declaratoria de estado de excepción ante episodios de activación del volcán Cotopaxi. Así mismo, en Quito, el 13 de agosto se experimentó represión contra manifestantes en la principal plaza de San Francisco donde se reunieron las distintas organizaciones y colectivos sociales. Como saldo de la respuesta gubernamental a las demandas, se registraron 229 casos de agresiones, detenciones, y allanamientos, en distintas zonas del país⁶. Entre los cargos imputados desde la Fiscalía General del Estado constaban aquellos de sabotaje y terrorismo, incitación a la discordia, entre otros (*Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador*. Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial, agosto 2015).

En este escenario, en la Amazonia se produjeron distintas reacciones. Se evidenciaron posicionamientos de alianza con el gobierno, principalmente en la Amazonia norte, y otros de resistencia y confrontación en el centro y

6 De los 229, se registran 105 casos en Quito (provincia de Pichincha), 50 en Saraguro (Loja), 13 en Cañar, 9 en Bomboiza (Morona Santiago), 8 en Puerto Murialdo (Orellana), 8 en Puyo (Pastaza), 6 en Ibarra (en Imbabura) y otros casos, en menor número, en otras provincias. Tomado de *Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador*, de 2015, del Colectivo Investigación Acción Psicosocial.

sur. En estas regiones amazónicas, no se encuentran posiciones unívocas, ya que hay en cada una complejos y fluctuantes ejercicios de etnopolítica; lo que ha sido una constante en la relación entre pueblos indígenas y Estado también en gobiernos anteriores. Un rasgo de las dinámicas sociales amazónicas son las alianzas, apropiaciones de instrumentos y objetos de poder del «otro», de las élites políticas y económicas del país, lo que incluye sus discursos y retórica. Las disputas internas por la representación política se producen dentro de las comunidades y pueblos indígenas, y van desde la deslegitimación y el ejercicio de la violencia directa hasta la intervención de acciones chamánicas. Los variados matices y posiciones de las dirigencias indígenas amazónicas se abordan en los siguientes acápite de este artículo.

De la buena voluntad del gobierno y las ilusiones del desarrollo

Mientras desde provincias de la sierra y de la Amazonia suroriente varias dirigencias indígenas de la Conaie y bases de la Ecuarunari y Confeniaie se movilizaban hacia Quito, en el marco de la Marcha Indígena y Paro Nacional, para cuestionar la política gubernamental, una reacción totalmente inversa asumieron dirigentes de algunas nacionalidades del norte amazónico. Siona, secoya, a'ï cofán de la provincia de Sucumbíos, facciones waorani de las provincias de Napo y Orellana, y kichwas de la provincia de Napo se plegaron en respaldo al presidente Rafael Correa, en la llamada «vigilia por la democracia» del 12 de agosto y en el Festival de la Juventud y la Alegría, del 13 de agosto, que tuvo lugar en la Plaza de la Independencia de la capital, con réplicas en varias provincias, organizadas por las respectivas gobernaciones. En la Plaza Grande de Quito, se concentraron la Coordinadora de Movimientos Sociales, que agrupó a delegaciones de la Corporación Nacional de Campesinos (Conace), de la Asociación de Negros del Ecuador (Asone) y de la Alianza Indígena en apoyo al presidente de la República⁷.

7 La Alianza Indígena es una organización paralela a la Conaie, creada en enero de 2015 con el apoyo e incentivo de la secretaría ejecutiva del movimiento de gobierno Alianza País. Aglutina a varios dirigentes andinos y amazónicos, algunos vinculados a la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), asambleístas indígenas de la lista 35 de Alianza País, y algunos dirigentes históricos del movimiento indígena, antes vinculados a la Conaie, como Antonio Vargas, quien preside la Coordinación de la Circunscripción Territorial Kichwa de Pastaza (ex dirigente de la otrora Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza), Miguel Lluco (de Cotopaxi), Delia Caguana (dirigente de Chimborazo), entre otros. El dirigente es Franklin Columba, de la Fenocin (*El Universo*, 2015a).



La Plaza estuvo resguardada por 200 indígenas amazónicos de fuerzas de seguridad shuar denominados *arutam*⁸, ataviados con camuflaje militar y pintura facial de guerra. Para ello desde el gobierno se facilitó transporte, estipendio diario y recursos para boletines de difusión. El móvil de las concentraciones afines al régimen era «celebrar un gobierno responsable donde otros gobiernos no lo han hecho», proteger la democracia y respaldar el proyecto político de la Revolución Ciudadana, esto contra los grupos que, desde su perspectiva, buscaban desestabilizar al país. Dentro de los planteamientos de dirigencias afines al régimen, «apoyaban al diálogo nacional por la equidad y justicia».

Según las narrativas de los dirigentes de la Amazonia norte, el gobierno y principalmente el presidente han materializado su política de desarrollo en obra física tangible, de modo que expresan ante ello una confianza plena, basada en la idea de que existe buena voluntad del gobierno para establecer el diálogo con los pueblos y nacionalidades indígenas a fin de llegar a acuerdos para su inclusión social.

Para adentrarnos en el sector de apoyo al gobierno, profundizaremos en la perspectiva del presidente a'i cofán de la comunidad de Dureno, localizada en el nororiente en la provincia de Sucumbíos. Enfatiza este que ningún otro gobierno ha hecho lo que el actual, al haber asignado USD 9.000.000 para la construcción de la Ciudad del Milenio con 92 viviendas y una Unidad Educativa del Milenio en un área del territorio de la comunidad. Esta ciudad, a orillas del río Aguarico, es la tercera en ser construida en la Amazonia⁹ y hace parte de la política de compensación de comunidades

8 (El Universo, 2015b). Los arutam son militares indígenas retirados, excombatientes de la guerra del Cenepa, entre Ecuador y Perú (1995). Son de la nacionalidad shuar. Arutam es la divinidad suprema, quien aconseja y da fuerza para la vida. Se ha utilizado el término *arutam* para denominar a una fuerza de seguridad indígena. El recurrir a estas figuras es paradójico, ya que unas facciones participaron en la concentración del Festival de la Alegría en Quito para respaldar al gobierno, y otras estuvieron resguardando a dirigentes indígenas de la Conaie y de las otras delegaciones filiales en el Paro Nacional.

9 Dos Ciudades del Milenio fueron inauguradas previamente en la provincia de Sucumbíos, en territorio de Playas de Cuyabeno, en octubre de 2013, y en Pañacocha, a inicios del 2014. Ambas comunidades, de composición predominantemente kichwa y habitadas también por población mestiza colona, se encuentran en el área del Bloque 12, operado por la estatal PetroAmazonas. Se trata de comunidades que han devenido en «ciudades» planificadas de maqueta, construidas en compensación por actividades de exploración y explotación petrolera en sus territorios. Cuentan con viviendas equipadas con acceso a servicios de luz eléctrica, agua potable, Internet, televisión por cable y teléfono por fibra óptica, cocinas de inducción y demás equipamiento (muebles, computador, bicicletas). Las casas están concentradas una a lado de otra, rodeadas de jardines, donde se deben manejar protocolos de ordenamiento urbano. Los recursos para su construcción provienen del 12% del excedente de las regalías del petróleo.

amazónicas en zonas de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, considerados de interés estratégico por el Estado. Conforme a lo estipulado en la Ley de Hidrocarburos de julio de 2010, el 12% de las utilidades y excedentes petroleros se destinan a zonas de influencia de los proyectos extractivos.

La Ciudad del Milenio Cofán Dureno, en la narrativa de la dirigencia a'í cofán, fue gestionada para resarcir un convenio incumplido por parte del Estado suscrito a raíz del cese de 33 años de operaciones del pozo Dureno 1, a cargo previamente de la Texaco y PetroEcuador¹⁰. El pozo mencionado fue cerrado en 1998, luego de acciones de resistencia implementadas por los a'í cofán ante evidencias de los fuertes impactos ambientales y sociales que ellos consideraban que se estaban produciendo. Las acciones con las que consiguieron parar las operaciones del pozo se efectuaron con apoyo de la ONG Acción Ecológica, y fueron reforzadas por intervenciones cosmológico-animistas en que participaron chamanes a'í cofán tanto de Colombia como de Ecuador. Para estos, el mundo está dividido en tres planos cósmicos: en el plano subterráneo habitan los *kuan-kuan*, seres que viven en aldeas a las cuales puede accederse a través de túneles o pasajes (Califano y González, 1995). Estos seres son tutelares de los animales, así como demiurgos que enseñan a los humanos a cazar y pescar y permiten o restringen el acceso a la abundancia de recursos que se encuentran en el subsuelo. Se considera que el petróleo es la sangre de los *kuan-kuan* y que en la ingesta del yagé

10 En 1921, la Leonard Exploration Company, un frente de la Standard Oil, obtuvo 2,5 millones de hectáreas de concesión para explorar y explotar depósitos en la Amazonia ecuatoriana; en 1930, la Anglo Saxon Petroleum Company, más tarde denominada Royal Dutch Shell, obtuvo por 45 años una concesión de 10 millones de hectáreas (Martz, 1987 y Shodt, 1987, en Cepek, 2012). El Consorcio Texaco-Gulf descubriría más tarde depósitos de crudo de alta calidad en territorio a'í cofán y comenzó operaciones en 1972, cuando abre el pozo Dureno 1, hasta principios de la década del noventa, cuando la estatal PetroEcuador asume la explotación petrolera. Durante este tiempo de actividades, los cofán experimentaron contaminación en su territorio, especialmente en el agua del río Pisurie, además de haber sido afectados por enfermedades crónicas, como cáncer, desnutrición, deformaciones de nacimiento, problemas respiratorios y en la piel (CDES, 1991, en Cepek, 2012). Se desató por ello un proceso de resistencia ante actividades de exploración sísmica de parte de PetroEcuador realizadas sin consentimiento de los a'í cofán. En 1993, la gente de Zábalo detuvo trabajadores, confiscaron equipos, tomaron un pozo, quemaron un helipuerto y detuvieron la construcción de una carretera sobre un remanente de bosque. En 1998, un contingente cofán tomó el Pozo Dureno 1 en articulación con la ONG Acción Ecológica, y organizaron una paralización por el lapso de un mes exigiendo el cierre del pozo. Producto de este proceso se logra la firma de un convenio con el Estado, el cual, según la evaluación de los actuales dirigentes, nunca fue cumplido.



los chamanes se comunicaron en sus visiones intercediendo para que se seque el pozo Dureno 1.

El campo Guanta, con otros pozos, ha seguido en operaciones hasta la actualidad. A lo largo de 12 años, los a'i cofán de Dureno se resistieron a la realización de nuevas operaciones de exploración y explotación en su territorio; no obstante, se produjo un giro en recientes años, desde la asunción de una nueva dirigencia afín a entablar diálogos y negociaciones directas con personeros del Estado.

En su narrativa, al aproximarse y aliarse con el gobierno, buscan romper con formas de ventriloquismo y dependencia hacia ONG, asumiendo propias decisiones sobre el desarrollo. En previas décadas los aliados eran Acción Ecológica en la oposición ante el extractivismo, The Nature Conservancy (TNC) y el proyecto Caiman y la Fundación Sobrevivencia Cofán en la gestión de territorios¹¹.

La Ciudad del Milenio, actualmente en construcción, es un proyecto emblemático gubernamental apuntalado por la empresa pública Ecuador Estratégico, que para los cofán de Dureno representa un logro producto de los diálogos directos mantenidos con el ex ministro de sectores estratégicos y actual vicepresidente, y posteriormente con el presidente Rafael Correa. En la práctica, la Ciudad del Milenio significó aceptar la reapertura del pozo Dureno 1 y la ampliación de la plataforma Guanta 12, en territorio a'i cofán, en donde se perforó el pozo Dureno 2, todo ello precedido por las actividades de exploración sísmica realizadas por la empresa BGP.

El agenciamiento político cofán se orienta por liderazgos emergentes y busca tejer alianzas con el gobierno central para conseguir proyectos de desarrollo que mejoren sus condiciones de vida y lograr la titulación de territorios en áreas naturales protegidas. En el caso de Dureno, como lo expresa su presidente Eduardo Mendúa, se tienen que beneficiar del petróleo.

Gracias a Dios en las partes donde están los pueblos indígenas Dios ha puesto la riqueza petrolífera, la riqueza de minería, de muchas cosas. [...] comparando con otras partes aquí en la Amazonia hay bastante lo que hay la minería de material pétreo, lo que es el oro, lo que es el petróleo para el desarrollo. Entonces hay muchas cosas, creo que eso también ha sido una

11 La nacionalidad a'i cofán tiene un territorio no continuo, repartido entre las comunidades de Duvuno, Dureno, Zabalo, Chandia Na'e y Sinangoe, algunas de ellas con territorios titulados y otras con convenios de uso y manejo del territorio, al estar trasladados con áreas protegidas (Reserva Cofán Bermejo, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Parque Nacional Cayambe-Coca).



de las riquezas que como pueblo, a parte de la cultura tenemos, eso es una gran riqueza para nosotros (entrevista, agosto de 2015).

Su proyección es conseguir un desarrollo equitativo, solidario y económico en la comunidad. Observan conquistas y logros tanto con la Ciudad del Milenio en construcción, las indemnizaciones y compensaciones obtenidas tras las actividades de exploración y explotación, que suman alrededor de USD 1.200.000. Incluyendo la indemnización por USD 384.000, la compensación por USD 150.000, más plazas de trabajo, la compra de 50 canoas con las que han prestado servicio de transporte fluvial a PetroAmazonas y subcontratistas, y otros rubros como recursos para asambleas y programas comunitarios¹². De la interlocución con el Estado, Eduardo Mendúa ve positivo el convenio con el Programa SocioBosque, suscrito con el Ministerio de Ambiente en el 2008. En la actualidad, 8.000 hectáreas de un territorio de 9.571 están cubiertas por este convenio de incentivos para la conservación, del que reciben anualmente USD 44.120¹³.

Para la dirigencia cofán de Dureno, son importantes los derechos colectivos consagrados en la Constitución (2008), pero lo que más expectativa les genera es la apertura y voluntad política que consideran tiene el gobierno actual.

[...] antes siempre se lograba consensos grandes a través de la movilización de pueblos indígenas [y] se ha logrado llegar a insertar algunos derechos en la Constitución y ahora creo que lo mismo, pero ahora vemos que hay muchas más oportunidades que antes, porque ahora el presidente de la República es una persona muy abierta, muy sociable (entrevista, agosto de 2015).

Por el lado del gobierno, se han desplegado varias estrategias direccionadas en distintos frentes. Por un lado, se judicializa la resistencia o se

12 Con PetroAmazonas se firmó un convenio de compra de ocho camionetas con un contrato para brindar servicio de transporte a la misma; se prepararon cinco choferes profesionales, se compraron motores fuera de borda para cada centro de los cinco que conforman Dureno, se pagaron las tesis de los estudiantes de la universidad y se tiene ahora una furgoneta. Los recursos obtenidos con las camionetas se destinan al pago mensual de un cupo de \$100 de alimentación para cada familia de la comunidad.

13 Cada comunidad o pueblo indígena que contrae convenios con el Programa SocioBosque lo hace para un lapso de 20 años, y el área convenida entra en conservación, no debiendo utilizar los recursos forestales con fines extractivos en ese lapso. El dinero que reciben lo administran de acuerdo con un plan de inversión con rubros predefinidos. Los a'i cofán de Dureno invierten en salud, educación, guardabosques, alimentación para los guardabosques y recursos de gestión.



criminaliza a quienes se oponen a la política gubernamental, principalmente al extractivismo minero y petrolero, y por el otro, se utilizan mecanismos de seducción y atracción de líderes jóvenes, con las promesas y ofertas del desarrollo, y se cooptan dirigentes históricos, algunos de ellos a través de su contratación como funcionarios. Siguiendo la narrativa previa, pareciera que el gobierno brinda oportunidades y apertura al diálogo, pero esto solo ocurre con aquellos sectores que aceptan sin mayor cuestionamiento su política económica. La apertura de la que habla el dirigente cofán no es una actitud general hacia el movimiento indígena nacional articulado a Conaie y sus filiales. Es así como no se procesan demandas o planteamientos formulados por las organizaciones amazónicas al respecto de temáticas vinculadas a la política extractiva.

En contraste, el presidente cofán de Dureno, quien se considera un hábil negociador, comenta su experiencia de proximidad con el gobierno:

Nos sentamos a conversar con el ingeniero Jorge Glas que era en ese entonces Ministro de Sectores Estratégicos. Fue en el 2011 que comenzamos. Él dijo, «vea, yo les felicito, creo que desde hoy comienza un cambio en su pueblo, porque veo jóvenes liderando su comunidad, pero jóvenes con inteligencia, con propuestas, eso es lo que buscamos, lo que quiere el país» (entrevista a dirigente a'i cofán, agosto de 2015)

La estrategia para dirigentes del norte amazónico es la de estar cerca del gobierno, lo que se hace a la par de interiorizar su retórica del desarrollo, y repetir los discursos gubernamentales que de forma reiterada se pronuncian en los enlaces ciudadanos de cada sábado. Los dirigentes se apropian y manejan elementos discursivos difundidos en la publicidad de la empresa Ecuador Estratégico y de otras entidades gubernamentales.

En palabras del mismo dirigente, que guarda correspondencia con la activa presencia cofán en los actos de apoyo al movimiento de gobierno Alianza País el 13 de agosto:

Yo soy muy activo, siempre he estado presente en los eventos que el gobierno organizaba, porque era un evento integral con la sociedad del país. Entonces hemos ganado ese espacio también. Hemos sido uno de los pueblos que siempre hemos estado firmes con el presidente, porque se ha visto cambios, en donde los pueblos indígenas hemos sido considerados y tomados en cuenta. Se ve por primera vez en la historia, creo que es el único presidente que saluda a todo el mundo, que se sienta a comer con los indígenas, que habla, que conversa. Eso es algo increíble (entrevista, agosto de 2015).

La gestión gubernamental es evaluada positivamente por dirigentes cofán, en lo que respecta a inversión en educación, vialidad, salud y emprendimientos. Se enfatiza que los indígenas «son tomados en cuenta» y que existe el interés por resarcir a los pueblos amazónicos históricamente olvidados por gobiernos precedentes durante el auge petrolero. Frases como «proyectos estratégicos», «proyectos macrosustentables», «alcanzar el buen vivir» forman parte de los discursos de los dirigentes, lo que guarda similitud con los enunciados presidenciales. Las alusiones al desarrollo, al crecimiento económico, a salir de la pobreza, que constantemente son enunciadas por personeros gubernamentales, son apropiadas e incorporadas a la etnopolítica de las dirigencias del norte amazónico. Se puede considerar que los regímenes de representación que conllevan los discursos del desarrollo desplegados por las instituciones del Estado trazan y dibujan nuevas cartografías de la desigualdad mediante la integración de territorios y recursos, aunque encubiertas por el manto del discurso de la «inclusión» y de la eliminación de la pobreza y la marginalidad en la Amazonia.

En palabras de la dirigencia cofán de Dureno, se concibe el desarrollo en términos de mejoras en la infraestructura educativa, en la estética y en la calidad (en materiales) de las viviendas, al tener nuevos puentes y vías e iluminación exterior en la comunidad, lo que se visualiza como cosas que se lograrán con la Ciudad del Milenio gracias al apoyo de las entidades gubernamentales. En la cuestión educativa no se menciona el tipo de educación, si será intercultural bilingüe, lo que contrasta con la alta valoración que hacen los cofán del manejo cotidiano de la lengua a'ingae y del mantenimiento de sus prácticas culturales.

La proyección de la actual proximidad de la dirigencia cofán con el Estado llega a cierto delirio por los alcances y logros del desarrollo. Se visualiza que en el futuro puede haber nuevos pozos, todo ello susceptible de negociaciones que puedan aportar mayores beneficios a la comunidad. En este horizonte, se habla de crear una empresa comunitaria de servicios petroleros, de implementar ferreterías cofán en Lago Agrio, de piscicultura a gran escala con fines comerciales y valor agregado, de turismo, de una compañía de material pétreo. La visión está puesta en convertir a Dureno en una comunidad turística empresarial económicamente fuerte y «aliada del gobierno». Inclusive se piensa en crear un fideicomiso y fundaciones para el desarrollo y apoyo a otras comunidades.

Ante esto, se minimiza la perspectiva de los impactos ambientales, sociales y culturales que pueden ocasionar las actividades extractivas en territorio cofán. No se profundiza en qué efectos puede tener la llegada de familias de varios centros de la comunidad de Dureno (Uperito, Ukavati,



Pisurie Kanke, Bavurue) que se concentrarán en las 92 casas de la Ciudad del Milenio, en construcción. No se prevén impactos considerables, debido a que se les ha ofrecido actividades extractivas responsables, con alta tecnología y pozos direccionales.

En este escenario, afloran nuevos estilos de liderazgo, caracterizados por la capacidad de interactuar con actores externos, de la burocracia estatal, inversionistas e interlocutores internacionales. Si bien, otrora el liderazgo se centraba en jefaturas chamánicas legitimadas a nivel intraétnico por su sabiduría espiritual o, en otro momento, en los años noventa, estaba anclado en dirigentes que asentaron su autoridad con una tónica de resistencia ante el avance de actividades extractivas y de colonización, la actual jefatura es, en palabras del presidente de Dureno, «de sabiduría política, de administración para saber interlocutar con el Estado». Esto es, el poder de manejar otros códigos y lógicas, que no son otras que las del desarrollo, en un contexto de globalización que cada vez más envuelve las dinámicas amazónicas.

De esta manera se argumenta la participación cofán en los eventos de apoyo al gobierno el 13 de agosto. En la perspectiva del presidente de Dureno, es oportuno mantener las alianzas y no es significativo marchar en contra de proyectos normativos, que no atañen directamente a las nacionalidades y pueblos indígenas, sino a otros sectores del país.



FIGURA 1. Dirigencias del norte amazónico en apoyo al presidente Correa durante el Paro Nacional

Intervenciones gubernamentales y división en organizaciones amazónicas



Una de las estrategias del gobierno nacional para intensificar el extractivismo en el país ha sido dividir al movimiento indígena, a fin de debilitarlo y conseguir respaldo a su política económica. En la Amazonia, la Confeniae se ha visto intervenida debido a que el consejo de gobierno, así como la instancia del Parlamento Amazónico (Parnae), se han posicionado en defensa de los territorios indígenas, en contra de la ampliación de las fronteras extractivas petroleras intensificadas con la XI Ronda Petrolera en el 2012¹⁴ en provincias del suroriente y de la implementación de la minería a gran escala en Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Entidades como la empresa pública Ecuador Estratégico han desplegado ofertas de inversión en Unidades Educativas del Milenio, Ciudades del Milenio, centros de salud, infocentros, parques lineales, aulas móviles condicionadas a la aceptación de las actividades extractivas en territorios indígenas. A la par, al emplear jóvenes y líderes de las nacionalidades, se ha buscado entrar en interlocución directa con las comunidades, saltándose las instancias más altas de representación organizativa de las nacionalidades y sus procesos asamblearios de toma de decisiones.

El núcleo duro de la resistencia en la Amazonia suroriental frente a la XI Ronda Petrolera del 2012, hasta la actualidad, ha estado conformado por la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nacionalidad Shiwiar (Nashie), el pueblo ancestral kichwa de Sarayaku, lideresas articuladas de varias nacionalidades shiwiar, sapara, waorani, kichwa y shuar, quienes han

14 En el marco de la XI Ronda Petrolera, el presidente de la Confeniae, Franco Viteri, se opuso y denunció la falta de congruencia del proceso de consulta previa con la normativa internacional y constitucional de derechos de los pueblos indígenas. Cuestionó que la consulta no consideró la propia institucionalidad y organizaciones indígenas, que se convocó a participar en centros de gobiernos seccionales (juntas parroquiales), en tiempos demasiado cortos, sin respetar procesos internos de toma de decisión, sin cumplir estándares de consulta previa, de buena fe, con pertinencia cultural y lingüística y sin la debida información, además de que se condicionó el acceso a servicios de infraestructura e inversión del Estado a la aceptación de actividades extractivas. La Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), la Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (Nashie), comunidades originarias de la Nacionalidad Sapara y el pueblo kichwa de Sarayaku expresaron un contundente rechazo, si bien otras organizaciones llegaron a firmar convenios con la Subsecretaría de Hidrocarburos (SHE), entre ellos, dirigencias de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE), la dirigencia de ACIA en Arajuno, la comuna San Jacinto del Pindo, la Nacionalidad Andwa, la dirigencia kichwa de Pakic y de la comuna Canelos. Otras dirigencias de las organizaciones kichwas de Pastaza, como Kawsak Sacha, tuvieron inicialmente una posición ambigua, si bien en las bases había rechazo a su accionar.



experimentado el asedio constante por parte del gobierno. Por un lado, a varios de los líderes y lideresas se les ha iniciado procesos legales por sabotaje y terrorismo y a otros se les ha encarcelado o maltratado. La persecución individual se ha complementado con injerencia en las organizaciones a fin de dividir las, debilitar los liderazgos contrarios al gobierno y crear nuevos liderazgos afines a la política de Estado, llegando al extremo de negar el reconocimiento legal de las directivas y consejos de gobierno.

Entre los varios casos, la dirigencia de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno (ACIA), que aglutina a 24 comunidades kichwas con una trayectoria organizativa significativa en la provincia de Pastaza, firmó un convenio con la Subsecretaría de Hidrocarburos (SHE), en el marco de la XI Ronda Petrolera, para el inicio de actividades de exploración sísmica en su territorio, a cargo de la empresa italiana AGIP. Con esto se concreta la ampliación del Bloque 10, el único que ha operado en la provincia por más de veinte años¹⁵.

El nuevo consejo de gobierno, con su presidente Darwin Tanguila, tomó la decisión de impedir la siguiente fase de explotación por el incumplimiento del convenio firmado por la dirigencia anterior. Frente a esto, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, actualmente la entidad encargada de otorgar reconocimiento legal a las nuevas directivas u organizaciones, les ha negado su registro, imposibilitando así sus gestiones administrativas y económicas¹⁶. La Subsecretaría de Hidrocarburos, en

15 El convenio denominado «De compensación para el desarrollo y ejecución de las actividades de exploración del Bloque 10 de la Región amazónica ecuatoriana entre la empresa operadora AGIP Oil Ecuador, Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza» fue suscrito el 22 de agosto de 2012 para un período de 18 meses, teniendo como testigos al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y al Ministerio de Ambiente. El convenio suscrito formaliza la aceptación de ACIA a los trabajos por parte del Proyecto Exploratorio en el campo Oglán, en un área del territorio de las comunidades shuar washint y ceploa de ACIA, a ser operado por AGIP. Para esto se deslindó toda un área del territorio de ACIA, que estaba dentro de la Reserva Comunitaria Oglán. El convenio permitía estudios de impacto ambiental para la obtención de la licencia ambiental y aprovechamiento forestal especial, estudios y construcción de una plataforma de perforación, movilización de equipo de perforación heliotransportable, perforación y pruebas en el pozo Oglán 2. Como compensación económica por eventuales daños al ambiente, conforme el Convenio, AGIP se comprometía a entregar a través del gobierno provincial de Pastaza USD 400.000 para proyectos de desarrollo económico y social en comunidades de ACIA. Se establecía también un recurso de indemnización por uso de espacio territorial, no claramente especificado en su cuantía, pero acordado de forma oral en USD 1.000.000. De cuatro hectáreas convenidas, se usaron siete, sin autorización ni adenda al convenio.

16 Anteriormente en el Ecuador la instancia que registraba la personería jurídica de organizaciones y reconocía pueblos y nacionalidades era el Consejo Nacional de Desarrollo

octubre de 2015, invitó a la dirigencia de ACIA a Quito, para dialogar sobre la continuación del convenio de AGIP, esto a pesar de que como organización no puede manejar legalmente sus fondos, ni aun los de un recurso que reciben del Ministerio de Salud por arriendo de un local en su sede. La dirigencia decidió no trasladarse a Quito y solicitó que sea la SHE la que se reúna en las oficinas de la organización. Funcionarios de dicha entidad llegaron en un día acordado, acompañados de un grupo de funcionarios de entidades, como el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), Ecuador Estratégico, la gobernación y la alcaldía de Puyo. En la narrativa de dirigentes de ACIA, vestidos de tocados de plumas y collares de semillas, sentaron frente a su mesa central a la comitiva del Estado, en un ejercicio de interlocución de gobierno a gobierno.

La dirigencia cuestionó a los funcionarios la falta de cumplimiento del convenio. Hasta octubre de 2015 se había entregado solamente USD 300.000, con intermediación del gobierno provincial, en proyectos que se desvanecieron como la entrega de pollos, alevines para piscicultura, plantas de café y cacao. El monto de USD 1.000.000, que no consta en documentos de respaldo, suponía la dotación de agua entubada a las comunidades filiales de ACIA a cargo de Ecuador Estratégico, hasta la fecha no ejecutada. Por parte de la dirigencia, el incumplimiento se considera un engaño, por ello las comunidades indígenas de Arajuno se sienten maltratadas por el Estado (entrevistas, César Cerda y Darwin Tanguila, septiembre de 2015).

ACIA es el único pueblo kichwa que, según lo estipulado por la Constitución de 2008, presentó una propuesta de gobierno de la Circunscripción Territorial Kichwa, amparada en esta figura que se reconoce como una entidad jurídica administrativa del Estado, también sustentada en la normativa secundaria del Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad). Sin embargo, no ha sido viabilizada y el trámite ha quedado inconcluso en la Corte Constitucional. Para el Estado perdieron interés las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI), por temer un ejercicio autonómico de los pueblos indígenas en sus territorios, principalmente en la Amazonia, donde se encuentran recursos del subsuelo muy apetecidos por la dinámica de los *commodities* de exportación.

de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Codenpe), el que fungía como institución semiautónoma, articulada de manera orgánica al movimiento indígena. Eliminada en 2014, algunas de sus competencias fueron asumidas por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, que ejerce control sobre organizaciones sociales, y que actúa como una instancia de inteligencia del Estado.



Para algunas organizaciones de los pueblos kichwa de Pastaza, el interés de configurar CTI obedece al sueño de ir más allá de la titulación de territorios étnicos, ya conseguida casi en su totalidad, y de avanzar en constituir jurisdicciones territoriales administrativas que cuenten con presupuesto del Estado para implementar sus Planes de Vida. Inicialmente, en el 2011, Ecorae socializó la normativa nacional y entregó presupuesto a varias nacionalidades amazónicas por un monto total de USD 3.000.000, para que generen propuestas de gobierno, estatutos y Planes de Vida. En la actualidad, esta competencia fue eliminada de esta institución y su implementación se diluyó con el tiempo.

El interés de Ecorae en viabilizar las CTI sirvió para crear condiciones de confianza en el Estado, en cuanto a las demandas de autonomía territorial y autogobierno esperadas por décadas, si bien, como figura, tenía limitaciones para un verdadero ejercicio autonómico. No se ha logrado cristalizar las CTI, ni siquiera a pesar de que varios líderes históricos del movimiento indígena amazónico, principalmente kichwas, se vieron envueltos directamente en la gestión de este proceso, alineados con la política petrolera. En el caso de ACIA, algunos dirigentes, que décadas atrás lideraron la resistencia contra el extractivismo en la provincia y formaron parte de la otrora emblemática Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), terminaron conniventes con el convenio con la SHE. Actualmente explicitan su desencanto con el gobierno, lo que no necesariamente puede ser leído como un rechazo al extractivismo por sus posibles impactos ambientales, sociales y culturales. De hecho, la reunión descrita anteriormente obedeció a que demandaban cumplimiento del convenio y de los acuerdos de la fase exploratoria, como requisito para continuar con nuevos acuerdos conducentes a una siguiente fase de explotación en el territorio.

Otro tipo de conflictividad entre Estado y organizaciones indígenas se evidencia en los casos de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE) y la Nacionalidad Shiwiar (Nashie). Ambas, en décadas previas, conformaron un Comité Interfederacional junto con federaciones shuar ante rondas de licitación petroleras¹⁷ promovidas por anteriores gobiernos, en la década de

17 En el gobierno de Lucio Gutiérrez se lanzó la IX Ronda Petrolera para el centro-sur de la Amazonia, que afectaba tanto a Pastaza como a la región del Transcutucú, en Morona Santiago. Para entonces la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) con sede en Sucúa (Morona Santiago), la OPIP, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (Finae) y la Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza Ecuador (Onshipae) se convirtieron en actores protagónicos de oposición, por las posibles afectaciones a territorios indígenas en Napo, Pastaza y Morona Santiago. El primer anuncio de la IX Ronda fue en el 2001, con posibilidades de afectar comunidades y pueblos



2000 y ante la XI Ronda se opusieron a la consulta previa, por incumplir los estándares de la normativa constitucional e internacional. Se opusieron a que delegados gubernamentales ingresaran en las comunidades, al desconfiar de los mecanismos a utilizarse.

Este poderoso frente de nacionalidades, que ha resistido por quince años el ingreso de actividades extractivas en sus territorios, sufrió resquebrajamientos a nivel dirigenal al 2015. En el caso de la nacionalidad shiwiari, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en septiembre de 2015, se aprovechó de un manejo irregular del fondo semilla de la organización obtenido por Convenio con el Programa SocioBosque con el Ministerio de Ambiente, para quitar la personería jurídica a su dirigenal, conocida por su oposición al petróleo, y le otorgó reconocimiento e inscripción a una nueva dirigenal electa en asamblea autoconvocada en agosto de 2015 por shiwiari afines al diálogo con el gobierno¹⁸.

Con relación a la NAE, una nacionalidad con una trayectoria exitosa en términos organizativos, con interesantes iniciativas de conservación del territorio y emprendimientos empresariales no extractivos, que ha sabido manejar una red de aliados de ONG y cooperación internacional y que logró mantener una frontal oposición al ingreso de actividades petroleras en su territorio¹⁹, su perfil se ha visto debilitado. Con la llegada a la presidencia de Rubén Tsamarent, en 2014, quien en consejos de gobierno anteriores se desempeñó como dirigente de territorio, se produjo un quiebre en la organización, cuando el dirigente manifestó una posición ambigua ante

shuar, achuar, shiwiari, sapara y kichwa. Las organizaciones indígenas contaron con apoyo de ONG como la Fundación Pachamama y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES); como estrategias, se implementaron actividades de resistencia directa e itinerarios jurídicos con apoyo de la Confeniae como organización indígena amazónica y la Conaie a nivel nacional (Melo, Ortiz y López, 2002).

18 El vicepresidente de la nueva dirigenal de la Nashie, Andrés Pandam, fue funcionario de Ecuador Estratégico, y el actual presidente, Abel Santi, admitió haber recibido dinero en préstamo del fondo del programa SocioBosque, en tanto que al presidente anterior lo destituyen por esta razón. En sus palabras «todos los [préstamos] que pedimos nos dieron a condición de devolver [los] en dos años. El nuevo acuerdo con SocioBosque es que si no devolvemos nos descontarán de las remesas que recibimos cada 6 meses» (entrevista a Abel Santi, noviembre de 2015). No expresa directamente estar de acuerdo con la actividad petrolera, pero sí estar dispuesto a dialogar con el Estado, lo que no ocurría con la anterior dirigenal, de Fernando Santi.

19 La NAE cuenta con una empresa aérea (Aerotsensa) con sede en Shell, instalaciones de turismo certificado ecológico en Kapawi al sur de Pastaza y comercialización de productos del bosque con la empresa cosmética y de plantas medicinales Chankuap. Anteriormente tenían apoyo de la Fundación Pachamama y en la actualidad con el banco KFW del gobierno Alemán para proyectos de conservación y servicios ambientales.



la política petrolera del Estado, lo que llevó a su destitución en asamblea del 24 de septiembre de 2015. Las bases y los otros miembros del consejo de gobierno cuestionaron su aproximación y diálogos con funcionarios del Estado, por no contar con la aprobación interna. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, en este juego de fuerzas, motivó la creación de un segundo consejo de gobierno, intentando dividir la organización, y posicionó a Rubén Tsamarent como presidente, valiéndose inclusive del apoyo de la fuerza pública²⁰.

En carta de respaldo expedida por la Conaie y dirigida a Bolívar Wasum, actual presidente de la NAE, tras el derrocamiento de Rubén Tsamarent, se expresa lo siguiente:

[...] ahora más que nunca nuestras organizaciones y sus verdaderos dirigentes estamos firmes en pie de lucha, por la defensa de nuestros derechos colectivos: Territorio, Autodeterminación, Autogobierno, Justicia Comunitaria, Educación propia, Idioma propio, Libertad de pensamiento, Territorios libres de militarización, entre otros, que son consagrados en la Constitución de la República, los Acuerdos y Tratados Internacionales; es así como el gobierno viola estos derechos para permitir el ingreso de las transnacionales dedicadas a la gran minería a cielo abierto y a la explotación petrolera en nuestros Territorios. Además el gobierno en respuesta a las decisiones legítimas de defender estos derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, ha respondido con violencia, criminalizando a los que luchamos y defendemos nuestra forma de vida [y] persiguiendo políticamente, amedrentando, manipulando, hostigando, amenazando, encarcelando a nuestros dirigentes, líderes y autoridades de nuestras organizaciones (Conaie, 18 de noviembre de 2015)

En lo que respecta a la Confeniae no se ha visto exenta de las presiones y el asedio gubernamental, conducente a su división. Es así como el 15 de septiembre en Unión Base donde se encuentra su sede en Pastaza, un grupo de dirigentes amazónicos articulados al gobierno, incumpliendo los mecanismos formales de convocatoria, realizaron un congreso para destituir a la dirigencia presidida por Franco Viteri, del pueblo kichwa de Sarayaku de

20 En redes sociales, la NAE ha circulado pronunciamientos en los que manifiesta lo siguiente: «desde ya responsabilizamos al Sr. Rubén Tsamarent de todo lo que aconteciere en la sede de la organización, ya que ha venido realizando actos divisionistas y de mala fe con intromisión de las autoridades gubernamentales, que tanto daño hacen, con el objetivo de debilitar y permitir el ingreso de transnacionales dentro de nuestros territorios» (comunicación, 20 de diciembre de 2015).

Pastaza, quien posee una trayectoria de rechazo a la explotación petrolera en territorios indígenas del suroriente.

En dicho congreso se nombró un nuevo consejo de gobierno, conformado por Felipe Tsenkush (shuar) como presidente y Valerio Grefa (kichwa del Napo) como presidente del Parlamento Amazónico. Días antes, algunos dirigentes del consejo de gobierno presentaron sus renunciaciones aduciendo que no había una buena coordinación en la dirigencia de Franco Viteri y que este se había despreocupado de la reconstrucción de la sede de la confederación. Se le imputaba haber asumido un proselitismo de oposición al gobierno nacional. El 24 de octubre efectuaron en Unión Base un «Primer encuentro del Sumak Kawsay» para reposicionar a la Confeniae-II, con una tónica de organización afín al gobierno.

Como reacción, el 13 y 14 de noviembre, Franco Viteri y el presidente del parlamento, Nelson Calapucha, convocaron a una asamblea ordinaria en Unión Base para analizar la coyuntura política nacional y la situación organizativa de Confeniae-I. En dicha asamblea se invitó a 21 organizaciones y 11 nacionalidades, con participación de 400 delegados, y se ratificó el mandato a los dirigentes. Cabe mencionar que no estuvieron presentes las organizaciones que representan a las nacionalidades del norte (siona, secoya, a'i cofán) ni delegados de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa del Napo (FOIN), de la Federación Interprovincial de Comunas y Comunidades Kichwas de la Amazonia Ecuatoriana (Ficckae), ni de la Organización de Comunidades Kichwas de Loreto (Ockil). Tampoco participó la dirigencia de la nacionalidad waorani (Nawe) ni la dirigencia de la Nacionalidad Sapara de Ecuador (NASE). Lo complejo del caso es que sí estuvieron delegados de suborganizaciones waorani de Napo y Orellana, así como organizaciones kichwas del Napo de la Cooperativa Rukullakta.

Hubo delegaciones numerosas del Pueblo kichwa de Sarayaku de Pastaza, delegaciones de comunidades sapara (Torimbo y Llanhamacocho), dirigencia no gobiernista de la Nashie, la dirigencia de la NAE achuar, dirigencia kichwa de ACIA Arajuno, de la Nación Quijos del Napo, y delegados de la Ficsh shuar con sede en Sucúa, Morona Santiago. Se encontraba el vicepresidente de la organización shuar Nashe de Morona Santiago, mientras el presidente de la misma respalda a la Confeniae-II, próxima al gobierno. También estaban delegados shuar de Pastaza, y achuar de Morona Santiago. El evento estuvo acompañado por el presidente, el dirigente de territorio y la dirigente de la mujer de la Conaie (Jorge Herrera, Severino Sharupi y Kitty Betancourt, respectivamente).



A lo largo del congreso de la Confeniae-I, contraria al gobierno, se cuestionó la autoconvocatoria de la Confeniae-II (articulada a la Alianza Indígena vinculada al gobierno nacional) y se mostró preocupación por los acuerdos que los líderes que la presiden han hecho con el Estado²¹ y por recibir fondos de apoyo de Ecorae para su congreso. Entre las varias intervenciones del congreso de la Confeniae-I, los delegados se mostraron preocupados por su histórica organización y enfatizaron su defensa de los derechos colectivos, territoriales, su autonomía y el Estado Plurinacional e Intercultural. Promulgaron, asimismo, que no permitirán que el gobierno los divida y se adueñe de sus territorios, por lo que se harían esfuerzos para recuperar su proyecto político-organizativo. Respaldaron a las organizaciones de las nacionalidades achuar y shiwiar por los momentos difíciles en que se encuentran.



FIGURA 2. Asamblea del 13 y 14 de Noviembre, 2015 de la Confeniae-I en Unión Base.

21 Algunos de los artífices de la Confeniae-II son dirigentes, como Moi Enomenga de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, quien apoyó la decisión gubernamental de finiquitar la Iniciativa Yasuní ITT para dejar el crudo bajo tierra. Otros dirigentes conocidos por alinearse con varios gobiernos nacionales de turno, tales como Antonio Vargas, de la comuna San Jacinto del Pindo, exdirigente histórico de la Confeniae y la OPIP, actual presidente de la Circunscripción Territorial Kichwa de Pastaza, quien durante el gobierno de Lucio Gutiérrez ocupó un cargo del Ministerio de Bienestar Social; y Felipe Tsenkush Shuar, antiguo dirigente de la Ficsch, antes diputado del Congreso por Pachakutik en el 2003, expulsado posteriormente por apoyar al partido Sociedad Patriótica del entonces presidente Lucio Gutiérrez en 2004. En ese mismo año fue acusado de recibir sobornos del gobierno de turno. Es quien actualmente preside la Confeniae-II.



En palabras del delegado del pueblo kichwa de Rukullakta, provincia de Napo: «los pueblos estamos aquí para defender nuestros derechos milenarios, con nuestra propia cosmovisión»²². Se planteó que con el reconocimiento o no del Estado gobernarían bajo sus propios principios. A los pocos días de concluido el congreso, la dirigencia de la mujer y la secretaria del Parlamento renunciaron a sus cargos en el consejo de gobierno, aduciendo que no era reconocido ni había sido nombrado por el Estado, y «por no poder caminar por el sendero del desarrollo»²³.

Algo que llama la atención es la rapidez con que el consejo de gobierno de la Confeniae-II fue reconocido por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, un día después de extendida la solicitud, lo que contrasta con la demora que hasta ahora tiene el registro del consejo de gobierno de la Confeniae-I, así como de los consejos de gobierno de las nacionalidades achuar (NAE) y kichwa de ACIA, de Arajuno. Frente a las divisiones propiciadas por el Estado, la Conaie, como la mayor organización nacional indígena, se ha pronunciado por la unidad de las nacionalidades y pueblos y por los modelos propios de vida, como el *Sumak Kawsay* y el *Tarimiat Pujustin* (Buen Vivir) dentro del Estado Plurinacional.

Sucesos últimos que evidencian hasta qué escala puede llegar la intromisión gubernamental en las organizaciones indígenas tuvieron lugar en la madrugada del 28 de septiembre de 2016, cuando la sede de la Confeniae en Unión Base en Pastaza fue invadida por miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la policía nacional a órdenes del Ministerio de Interior y Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Ingresaron para desalojar a familiares de la nueva dirigencia electa el 4 de septiembre en el XV Congreso de la Confeniae, quienes se encontraban en la sede para realizar una minga. Si bien la dirigencia presidida por el achuar Marlon Vargas cuenta con respaldo de 19 de 23 organizaciones de 6 provincias amazónicas y 9 de 11 nacionalidades, la Secretaría de Gestión de la Política ha registrado oficialmente a la dirigencia paralela (Confeniae II) de Felipe Tsenkush, shuar afín a la política gubernamental y extractiva.

La sobra continúa, si bien la dirigencia de Confeniae (I) legitimada por las bases ha demostrado una actitud férrea para no ser desplazada. Han desplegado pronunciamientos, ruedas de prensa, boletines de comunicación apoyada también por Conaie.

22 Tomado de notas de campo del Congreso de Confeniae. Unión Base.

23 Datos tomados de varios boletines publicados a través de redes sociales.



Mujeres indígenas de la Amazonia-centro: nuevos protagonismos y vocería propia

En el entramado de actores, es importante visibilizar el papel que han tenido mujeres indígenas de la provincia de Pastaza, de las nacionalidades sapsara, kichwa, waorani, shiwiar y shuar, quienes realizaron una emblemática marcha que contó con el respaldo de la Confeniae y Conaie y que partió desde Pastaza para llegar a Quito el 16 de octubre de 2013. El propósito de la articulación de mujeres amazónicas fue entregar al gobierno las resoluciones adoptadas en el XIV Congreso de la Confeniae, y el I Encuentro de Mujeres de las Organizaciones Indígenas Amazónicas, por Defensa de la Vida, el Territorio y el Buen Vivir. Constaba entre sus resoluciones el rechazo a la XI Ronda petrolera y al proceso efectuado de consulta previa. Cuestionaban el intento de ampliación del Bloque 10, así como la firma de convenios entre la Subsecretaría de Hidrocarburos (SHE) y dirigencias de ciertas nacionalidades y comunidades. Central a su movilización fue visibilizar el modelo comunitario de vida *Kawsak Sacha* o Selva Viva (Vallejo, 2014). A pesar de su movilización y la amplia recepción de parte de la población quiteña, las mujeres amazónicas no fueron recibidas por el presidente, quien les exhortó a presenciar la apoteósica inauguración de la primera ciudad del Milenio en Playas de Cuyabeno, en Sucumbíos.

En lo posterior las mujeres lideresas de Pastaza se han mantenido vigilantes ante la política gubernamental de ampliar la frontera extractiva a sus territorios. En el caso de mujeres kichwas de la Cuenca del Bobonaza y del Curaray, desplegaron la iniciativa denominada *Yaku chaski warmi*, que consistió en visitar comunidades por vía fluvial para comunicar sobre los impactos del extractivismo petrolero²⁴. Algunas de ellas participaron activamente en la marcha indígena y el Paro Nacional, y su activismo ha sido respondido por el Estado con judicializar su resistencia, más amenazas y represión. Ante ello, las mujeres han adoptado itinerarios legales, más allá

24 Del 24 al 28 de julio de 2015 se efectuó el primer Yaku Chaski Warmi. Un grupo de mujeres partieron desde la comuna Canelos y navegaron en canoa por el río Bobonaza visitando comunidades para alertarlas de los impactos que puede ocasionar el petróleo en las formas de vida y sustento y de los efectos de la contaminación ambiental al disminuir la productividad de las chacras, la biodiversidad de los ríos y de la selva. En las visitas las mujeres compartían con familias la toma de guayusa y de la chicha y comentaban sus visitas al norte amazónico, siendo el referente de los impactos lo sucedido en Sucumbíos con las operaciones de Chevron-Texaco. Otro referente más cercano al que se hacía alusión también eran los impactos de las actividades de AGIP en comunidades del Bloque 10 en Pastaza.



de las fronteras nacionales, para la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Es así como un grupo de siete mujeres presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda al Estado ecuatoriano por vulnerar derechos y judicializar la resistencia²⁵.

En un escenario complejo de división de las organizaciones y de intervención gubernamental en las estructuras de representación del movimiento indígena nacional y regional (amazónico), la articulación de mujeres indígenas de Pastaza ha exigido participar en la toma de decisiones sobre el territorio cuestionando las estructuras de poder internas a las organizaciones caracterizadas por liderazgos masculinos que las excluyen, a la par que frente al Estado se posicionan en la defensa de sus organizaciones y de la dirigencia de la Confeniae-I²⁶. Dentro de la agencialidad de las organizaciones indígenas, el giro ecoterritorial de sus luchas no es necesariamente nuevo, si atendemos a lo que en otras décadas ya se ha producido (Sawyer, 2004); tampoco es totalmente nuevo el «proceso de feminización de las luchas» (Svampa y Viale, 2014, p. 375). Lo llamativo está en que las mujeres indígenas no solo participan o acompañan en movilizaciones y marchas como en otros momentos históricos, sino que han asumido un rol protagónico, con propia vocería y mayor autonomía²⁷.

25 El 19 de octubre, ante la audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., EE.UU., sobre «Situación de defensoras y defensores de Derechos Humanos de pueblos indígenas y del Ambiente en Ecuador», se presentaron como peticionarias Patricia Gualinga (del pueblo kichwa de Sarayaku), Gloria Ushigua (de la Asociación de Mujeres Sapara), Alicia Cahuyi (vicepresidenta de la Nawe) y mujeres activistas mestizas: Margot Escobar (de Puyo), Esperanza Martínez (de Acción Ecológica). Estuvieron respaldadas por Earth Rights International (ERI) y Acción Ecológica (AE). En la audiencia, las mujeres expresaron sus testimonios sobre los mecanismos represivos que ha utilizado el Estado: criminalización, vigilancia, señalamiento en cadenas nacionales y sabatinas, además de ser objeto de procesos legales en su contra (ver *Eco Amazónico*, 2015a).

26 En el mes de noviembre efectuaron una rueda de prensa en el Puyo, en las oficinas de Sarayaku, en apoyo a Franco Viteri, presidente de Confeniae-II (ver *Eco Amazónico*, 2015b).

27 En el texto de Suzanne Sawyer, *Crude chronicles: indigenous politics, multinational oil and neoliberalism in Ecuador*, la autora describe que en 1997 se dio una marcha que recorrió la carretera panamericana. Las mujeres de Pastaza tuvieron un papel activo en una jornada desde el Puyo hasta los Andes centrales, hacia Quito. Caminaron alrededor de 200 mujeres que se consideraban y valoraban a sí mismas como *sinchi huarmituna* o mujeres poderosas. Se trataba de la segunda marcha de la OPIP hacia la capital. Las mujeres llevaban niños, pancartas, y había madres, abuelas, hijas y hermanas. Denunciaban ya para entonces la intensificación de la actividad petrolera en Pastaza. Se trataba de una marcha por la vida, el bosque y el respeto a la integridad cultural de la población indígena, con un rotundo no al petróleo. Estas descripciones nos hacen contrastar en cierta forma lo que Viale y Svampa (2014) consideran: que solo recientemente se ha dado una



FIGURA 3. Mujeres defensoras de la Naturaleza ante la CIDH

Análisis y consideraciones finales

Lo que ocurre en las relaciones entre Estado-organizaciones indígenas en el gobierno de Rafael Correa del Ecuador guarda correspondencia con lo sucedido al inicio del ejercicio gubernamental de presidentes considerados progresistas en Venezuela y Bolivia. En el Ecuador, posterior al proceso Constituyente de 2008, hubo una alta expectativa por el avance en la inclusión de derechos colectivos, de la naturaleza, de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre otros. Algo nodal fue el instituir el Estado como Plurinacional e Intercultural. Como lo dice Escobar (2010), se dieron importantes transformaciones constitucionales y en la política gubernamental, lo que incluyó la reversión de las políticas neoliberales y una renovación de la democracia, con la inclusión de perspectivas no occidentales. Con esto el autor hace alusión a la incorporación de principios

feminización de las luchas, pues la experiencia amazónica muestra que las mujeres en Pastaza han tenido un activo papel en cuestionar el extractivismo y en posicionarse por la selva y sus medios de vida. Lo nuevo puede ser que las mujeres indígenas construyen alianzas que van más allá del movimiento indígena y han establecido puentes y redes de apoyo con organizaciones ecologistas y feministas a nivel nacional, y también diálogos con expresiones similares en otros países de la región. Lo nuevo es que son voceras en ruedas de prensa, construyen itinerarios legales con mayor autonomía de las dirigencias masculinas y reclaman ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones tanto por el Estado como por sus propias organizaciones.

de las cosmovisiones indígenas, como el *Sumak Kawsay* (Buen Vivir) y la idea de propiciar una relación más armónica con la naturaleza.

Se puede interpretar que la integración del *Sumak Kawsay* a la Constitución de 2008 es un «cambio fundamental en la epistemología moderna» (Quintero, 2009, p. 89), con capacidad de transformar el pensamiento moderno que se había erigido en la dominación de la naturaleza. Sin embargo, en la práctica de la política gubernamental, si bien «reñido con el neoliberalismo, con el posneoliberalismo [...] no se ha despojado del todo de un neodesarrollismo» (p. 90)²⁸.

En el período de hegemonía neoliberal, desde la década del noventa hasta inicios del 2006, los regímenes gubernamentales buscaban modelar la conducta y condiciones para el movimiento de población, capital y recursos (Sawyer, 2004). Las políticas estaban dirigidas a la privatización del sector público, a liberalizar el mercado, a desregular la economía y a descentralizar funciones administrativas, para liberar al Estado de su rol orientador del desarrollo social. Como lo expresa Sawyer (2004), el Estado se convirtió en facilitador de la acumulación de capital transnacional. En este marco hubo, sin embargo, convergencia con políticas multiculturales de reconocimiento de identidades étnicas y derechos culturales, emergiendo en el Ecuador una institucionalidad indígena para implementar políticas públicas en cuestiones de salud intercultural, educación intercultural bilingüe, y se implementaron proyectos de desarrollo administrados por técnicos indígenas. Esta institucionalidad, anclada en el Estado, a la vez se articulaba al movimiento indígena.

En la perspectiva de Yashar (1997), los movimientos indígenas de América Latina consiguieron ampliar con sus luchas los derechos de ciudadanía desde la diversidad e identidad, constituyéndose en actores políticos contra el poder hegemónico de la globalización y el neoliberalismo. Los pueblos indígenas, en el contexto neoliberal, desafiaron y resistieron la agenda del Estado orientada a privatizar, liberalizar y desregular la economía nacional,

28 Como lo analiza Oviedo (2011), el *Sumak Kawsay* tiene sustento en las tradiciones y cosmovisiones indígenas andino-amazónicas; sin embargo, el gobierno ha ido perfilando significados para su política del Buen Vivir enmarcados más bien en perspectivas de modernidad que no rompen con discursos modernos del desarrollo. Oviedo cuestiona que se estarían vaciando conceptos, manipulándolos de acuerdo con los intereses del poder económico-político. El *Sumak Kawsay* queda así debilitado y subordinado a un Buen Vivir justificado en términos neorristotélicos, convergentes con la perspectiva del desarrollo humano (matriz liberal). No se termina rompiendo con la matriz antropocéntrica, y si bien se «revaloriza la naturaleza», sigue fortalecida una lógica de dominio sobre esta.



como sucedió en el caso del movimiento indígena ecuatoriano (Sawyer, 2004). Los indígenas amazónicos frustraron las metas del capital transnacional corporativo a través de protestas, marchas y paralizaciones, a la vez que lograron repensar la configuración del Estado nación monocultural. En una lectura coincidente, Van Cott (2003) considera que los movimientos indígenas han contribuido a una mayor democratización. En otra perspectiva, según Hale (2005), si bien en el proyecto étnico del neoliberalismo la gobernanza de la diversidad incluía un limitado reconocimiento de derechos culturales, se produjo un rechazo de aquellas propuestas de cambio económico que resultaban más radicales. Es así como se creó una dicotomía entre sujetos indígenas reconocidos versus otros no reconocidos, lo que moldeó, en el marco de estos esquemas, las subjetividades indígenas. Hubo procesos de cooptación del movimiento indígena y se intentó marginar sectores indígenas que se mostraban más radicales.

En una mirada retrospectiva, la emergencia de los movimientos etnopolíticos que cobraron fuerza entre la década del noventa e inicios del nuevo siglo no solamente puede subsumirse en «luchas por la identidad», como dice Nash (2001), sin hacer alusión a los sistemas institucionales y económicos que definen y son reconstituidos por su presencia.

Contemporáneamente, en un modelo de Estado que en el Ecuador se asume como post-neoliberal y de izquierda, cabe analizar cómo se delinea la política indigenista. En el actual gobierno se ha fortalecido la institucionalidad estatal, se ha concentrado la planificación del desarrollo, se han realizado inversiones tendientes al cambio de matriz energética a través de megaproyectos de hidroenergía, se ha postulado un industrialismo «competitivo» basado en bioconocimiento, nanotecnología, petroquímica. Este esquema se sustentó en varios años de gobierno coincidentes con una bonanza en el precio internacional del petróleo, donde el gobierno adoptó el neoextractivismo (Gudynas, 2010; 2011)²⁹. Y si bien se incrementó el control estatal y la participación en los excedentes provenientes de las rentas extractivas, subsisten algunos de los componentes del extractivismo convencional y transnacional, sin cambios sustantivos en la estructura de acumulación, a la par que se avanza en la fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales. Como sucede en varios países de América Latina, el Ecuador ha experimentado

29 La economía ecuatoriana, no obstante, es vulnerable a la inestabilidad de la oferta y la demanda, así como a las fluctuaciones de los precios del petróleo en el mercado global, situación que se evidencia en las oscilaciones y tendencia al descenso en el precio del barril de petróleo de USD 80 en julio de 2014 a USD 45 en enero de 2015.



una reprimarización de su economía (Svampa, 2013), coincidiendo en lo que se denomina el «consenso de los *commodities*». En el caso ecuatoriano, dependiente del petróleo y —como se avizora más recientemente— dependiente también de la minería, el afán extractivista como base del crecimiento económico del país ha generado alta conflictividad en territorios amazónicos e irrumpe en la estructura política organizativa y de representación indígena.

Los gobiernos denominados «progresistas de América Latina», como el Ecuador de la «Revolución Ciudadana», actúan en función de un programa de racionalización económica, que busca intervenir en la totalidad de la vida de los sujetos gobernados, guiados por una política de la vida como modelo económico-político. Se utilizan dispositivos estratégicos para el ejercicio de la biopolítica: discursos, instituciones, habilitaciones arquitectónicas, leyes, medidas administrativas, entre otros aspectos, lo que implica un ejercicio de poder y de saber (Cortez, 2014a y b).

Al inicio del primer período de gobierno, hubo un respaldo importante de varios movimientos sociales: indígenas, ecologistas, de mujeres, campesinos, sindicales, entre otros. El presidente Correa enfatizaba en la inclusión de los pueblos indígenas y su apoyo le era significativo, por la importancia que tenía el movimiento indígena como un actor político prominente en la década anterior (Colloredo-Mansfeld, 2009; Pallares, 2002; Zamosc, 2007, en Martínez, 2014). Posteriormente, a partir del año 2009, se produjo un distanciamiento con la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus filiales, no así con otras, como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Esto trajo el aniquilamiento progresivo de las instituciones indígenas y el tratamiento de leyes que convergen en crear instituciones que no consiguen plasmar la plurinacionalidad en la estructura del Estado y en la formulación de las políticas públicas. En este sentido, Martínez Novo (2014) enuncia que es paradójico que el movimiento indígena tenga que continuar la lucha por demandas ya conquistadas en la década precedente con respecto al reconocimiento, autonomía y participación. En la perspectiva de Martínez Novo, «en el caso de Ecuador, la ciudadanía post-neoliberal ha dado lugar al retorno de un tipo de indigenismo que construye a los indígenas como receptores pasivos de las políticas gubernamentales» (p. 103). Podemos decir que, por otro lado, diseña normativas de participación abstractas, habilita procesos de consulta pre-legislativa para específicas leyes (de agua, tierras y territorios ancestrales y soberanía alimentaria), restringiendo la participación solamente a sectores y organizaciones que se muestren más neutrales y menos antagonicos a la política de Estado.



Por parte del gobierno nacional, se ha producido una apropiación de símbolos, de contenidos y de demandas del movimiento indígena, pero para vaciarlas de sentido o resignificarlas de manera funcional a su política gubernamental. Con relación a las organizaciones y dirigencias indígenas, se legitima y otorga reconocimiento a aquellas que no resulten contestatarias o interpelantes, mientras se deslegitima a las otras. Se ha producido un disciplinamiento de las subjetividades étnicas, en un indigenismo de Estado que busca integrar a los indígenas al desarrollo y eliminar las diferencias ontológicas, más profundas. Así, en eventos como la inauguración de las Ciudades del Milenio o de otra obra pública en la Amazonia, son bienvenidos marcadores identitarios (tocados, atuendos, pintura facial, danzas) e igualmente las intervenciones sabatinas presidenciales son traducidas al kichwa y al shuar chicham, en un despliegue performático de interculturalidad. No obstante se descalifica a líderes y lideresas indígenas que cuestionan la política-económica, los actuales nexos entre el gobierno y nuevos inversores, como China, la forma de ejercicio de la gubernamentalidad y el retroceso en la observancia de derechos colectivos.

En la actualidad, desde una facción crítica, el movimiento indígena nacional y amazónico cuestiona el poco avance en la construcción del Estado Plurinacional, la limitada participación en la formulación de normativas y política pública, así como el extractivismo petrolero y minero en territorios indígenas con las nuevas conexiones transnacionales y globales que articulan al Estado ecuatoriano en una geopolítica con nuevos actores prominentes.

Como se ha descrito en el artículo, en el gobierno actual se ha dado continuidad al uso de estrategias de cooptación de líderes indígenas que les otorgan posiciones en instituciones del Estado o en organismos deliberativos, como la Asamblea Legislativa. Si otrora esto sucedió en gobiernos de corte neoliberal como los de Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram, algo no muy diferente ocurre actualmente. Como lo manifiesta Martínez Novo (2014), que guarda correspondencia con lo descrito en este artículo, la estrategia gubernamental consiste en reforzar organizaciones indígenas aliadas mostrándoles que tiene recursos para distribuir, con lo que busca debilitar y dividir a la Conaie. Como se ha descrito, esto se extiende también al movimiento indígena amazónico y, por tanto, busca debilitar a la Confeniae y a organizaciones que representan nacionalidades contrarias a la política neoextractivista, como ocurre con la NAE y Nashie, y quebrar intentos de unidad entre los diferentes pueblos kichwas amazónicos, como ocurrió en Pastaza. Mientras tanto, en la Amazonia norte, las organizaciones siona, secoya y a'i cofán, también algunas kichwas se han investido de poder y



prestigio, acumulando capital simbólico mediante su cercanía con el Estado. Algunos dirigentes se perciben a sí mismos como hábiles interlocutores que cuentan con competencias para negociar con las entidades gubernamentales.

Las políticas étnicas, a diferencia de las indigenistas, «integran formas de representación y liderazgo, concepciones indígenas sobre poder y autoridad, moldeadas y continuamente resignificadas a la vez por la historia de situaciones de contacto interétnico y por las modalidades asociativas, como las categorías de sistemas ideacionales» (Vallejo, 2006, p. 32). La etnopolítica amazónica no está exenta de contradicciones y es el reflejo de las formas de sociabilidad caracterizada por la búsqueda de alianzas, apropiación de elementos que encarnan poder, con una alta capacidad transformativa dentro de los pueblos y nacionalidades, así como en la relación con otros actores: Estado, ONG y empresas.

Referencias

- Califano, M. y J. A. Gonzalo (1995). *Los AI del río Aguarico. Mito y cosmovisión*. Quito: Abya-Yala.
- Cepek, M. (2012). *A future for Amazonia. Randy Borman and Cofán environmental politics*. University of Texas Press.
- Cortez, D. (2014a). Genealogía del sumak kawsay y el Buen Vivir en Ecuador: un balance. En G. Endara (coord.), *Post-crecimiento y Buen Vivir. Propuestas globales para la construcción de sociedades equitativas y sustentables*. Quito: FES-ILDIS.
- ____ (2014b). Buen Vivir: ¿biopolítica o alternativas? En M. Vallejo y M. Aguado (comps.), *Reflexiones sobre los límites del desarrollo*. Memorias del VI Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente—VI CISDA. Quito: FLACSO.
- Eco Amazónico* (2015b). Amazónicas en la CIDH para hablar de los mecanismos de represión que usa el Estado. 19 de octubre. En línea: <http://ecoamazonico.org/?p=9081>
- ____ (2015b). Mujeres Amazónicas reclaman justicia en el caso de Franco Viteri. 21 de septiembre. En línea: <http://ecoamazonico.org/?p=8780>
- El Universo* (2015a). Oficialismo construye alianza indígena paralela a la Conaie. Quito, 2 de enero. En línea: <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/01/02/nota/4392711/oficialismo-construye-alianza-indigena-paralela-conaie>
- ____ (2015b). Marcha afín al Gobierno hizo vigilia en la Plaza Grande. Quito, 12 de agosto. En línea: <http://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/12/nota/5064920/rafael-correa-estara-jueves-quito-dice-patino-marcha-afin-gobierno>



- Escobar, A. (2010). Latin America at a crossroads: alternative modernizations, post-liberalism, or postdevelopment? *Cultural Studies*, 24(1), 1-65.
- Geografiando para la resistencia (2015). Mapa sobre el paro en el territorio ecuatoriano. Colectivo Geografía Crítica Ecuador. 18 de agosto. En línea: <https://geografiacriticaecuador.org/2015/08/18/mapa-sobre-el-paro-en-el-territorio-ecuatoriano/>
- Gudynas, E. (2010). Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas. *Ecuador Debate*, 79, 61-81.
- (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En F. Wanderley (coord.), *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*. La Paz: OXFAM, CIDES.
- Hale, Ch. (2005). Neoliberal multiculturalism: The remaking of cultural rights and racial dominance in Central America. *Political and Legal Anthropology Review*, 28(1), 10-28.
- Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador* (2015). Colectivo Investigación Acción Psicosocial. Agosto. En línea: <https://accionpsicosocial.wordpress.com/2015/08/24/informe-preliminar-sobre-las-estrategias-estatales-de-control-social-y-represion-en-el-marco-del-paro-nacional-en-ecuador/>
- Melo, M.; P. Ortiz, y V. López (2002). *Petróleo, ambiente y derechos en la Amazonía Centro Sur*. Quito: CDES, OPIP, AMAZANGA.
- Martínez Novo, C. (2014). Managing Diversity in Postneoliberal Ecuador. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 19(1), 103-125.
- Mazabanda, C. (2013). Consulta previa en la Décimo Primera Ronda Petrolera. ¿Participación masiva de la ciudadanía? En línea: <http://amazonwatch.org/assets/files/2013-07-consulta-previa-en-la-11a-ronda.pdf>
- Nash, J. (2001). *Mayan visions: The quest for autonomy in an age of globalization*. Londres: Routledge.
- Oviedo, A. (2011). *Qué es el Suma Kawsay. Más allá del socialismo y el capitalismo. Camino alternativo al desarrollo. Una propuesta para los «indignados» y demás desencantados de todo el mundo*. Quito: Sumak.
- Quintero, R. (2009). Las innovaciones conceptuales de la Constitución de 2008 y el Sumak Kawsay. En Acosta A. y E. Martínez (comps.), *El buen vivir: una vía para el desarrollo*. Quito: Abya-Yala.
- Sawyer, S. (2004). *Crude chronicles. Indigenous politics, multinational oil, and neoliberalism in Ecuador*. Durham-Londres: Duke University Press.
- Svampa, M. (2013). «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 244, 30-46.



- Svampa M. y E. Viale (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz.
- Van Cott, D. L. (2003). Cambio institucional y partidos étnicos en América Latina. *Análisis Político*, 48, 26-51. Bogotá: IEPRI.
- Vallejo, I. (2006). Derechos territoriales indígenas, movimientos etnopolíticos y Estado: un estudio comparativo en la Amazonía de Brasil y Ecuador. Tesis doctoral, Brasilia, Ceppac/UNB.
- ____ (2014). Petróleo, desarrollo y naturaleza: aproximaciones a un escenario de ampliación de las fronteras extractivas hacia la Amazonía suroriente en el Ecuador. *Revista Anthropologica*, 32(32). Lima: PUCP.
- Yashar, D. (2005a). *Contesting Citizenship in Latin America*. Cambridge University Press.
- ____ (2005b). *Citizenship regimes and indigenous politics in Latin America*. Princeton University.